

que con el establecimiento del libre comercio entre las diversas regiones dispersas del imperio español, el genio de la sociedad comercial iría sustituyendo de manera paulatina el antiguo orden de dominación.

Campomanes, Jovellanos, Campillo y Ward no acabaron de convencer del todo a su monarca de la necesidad de aplicar el liberalismo económico, pero sí lograron transformar la imagen política y cultural de la propia monarquía. Los «reinos de las Indias» pasaron a denominarse «provincias de Ultramar» y atrás quedó la noción de una comunidad transatlántica, una *ius commune* encarnada en la persona legal del rey. Los consejeros reales, en particular Campomanes y Jovellanos, consiguieron, en efecto, aproximar lo más posible la imagen de su soberano a la de un monarca constitucional, más magistrado que juez, sujeto a las leyes que él mismo había ratificado, y por primera vez los hispanoamericanos comenzaron a ser definidos en términos que hacían de ellos parte integrante de una periferia.

Al propugnar esta transformación, Ward y Campillo, Campomanes y Jovellanos hablaban en un idioma claramente moderno, que era además inconfundiblemente europeo. Aun cuando los tres imperios europeos de ultramar habían iniciado su andadura en el siglo xvi y xvii como diferentes tipos de sociedad con estructuras, objetivos y matrices ideológicas distintas, a finales del siglo xviii habían coincidido en un abanico común de inquietudes teóricas. La preocupación predominante en ellas era reparar las perniciosas consecuencias del «espíritu de grandeza» y del genio militar de gloria, la *grandezza* maquiavélica y su contrapartida eclesiástica, la evangelización y la ortodoxia doctrinal. Todo ello convergía en la búsqueda de una ideología, abanderada en parte por los nuevos lenguajes de la filosofía moral y la economía política, de un cálculo racional pero imbuido de humanismo de los beneficios que podían derivarse del imperio para todos cuantos participaban de él, la metrópoli y las colonias, los colonizados y los colonizadores. Ello exigía inevitablemente la evolución hacia una comprensión más compleja de las relaciones existentes entre las sociedades coloniales que habían surgido en América y sus respectivas «madres patrias». Esta relación entre colonia y metrópoli es la que analizaremos a continuación.

CAPÍTULO 5

METRÓPOLI Y COLONIA

Le peuple qui colonise le plus est le premier peuple;
s'il ne l'est aujourd'hui, il le sera demain.

PAUL LEROY-BEAULIEU,
De la colonisation chez les peuples modernes (1874)

I

«El imperio», escribió Talleyrand en 1797, es un arte, «el arte de poner a los hombres en su sitio». Era, decía, «quizá la primera de las ciencias de gobierno», y a pesar de ello sorprendía que aún no se hubiera escrito una relación completa de los procedimientos que conllevaba.¹

La observación de Talleyrand es demostrativa de la gran variación que había experimentado la noción global de la naturaleza de los imperios europeos de ultramar desde la época de su fundación. Durante buena parte de los siglos xvi y xvii, las discusiones en torno al imperio se habían centrado en la legitimidad y por tanto habían versado en gran medida sobre derechos, en especial los derechos de *dominia* conseguidos por medio de la guerra o la ocupación. Las tres potencias europeas habían descrito la conquista y el posterior poblamiento de América como un proyecto universal, que exportaba el cristianismo y la civilización europea emparejada a él a las «bárbaras» regiones del mundo, a cambio de lo cual les había sido concedido el control político y económico sobre los pueblos y tierras de los territorios que habían ocupado.

A Talleyrand no le interesaban estas cuestiones. El imperio no era para él un modo de obtener honor, gloria eclesiástica o riqueza en mineras, sino provecho comercial y agrícola. Él sostenía que los franceses debían abandonar las colonias que aún conservaban en el Caribe y crear otras nuevas imitando el modelo que a su parecer habían seguido los ingleses en Bengala, creando colonias que eran Estados semi-autónomos y que, sobre todo, no exigían, como en el caso de las colonias de América, la emigración forzosa de millones de personas.² Únicamente un considerable grado de independencia política garantizaría el tipo de crecimiento económico que al final beneficiaría por igual a la colonia y a la metrópoli. La corona francesa, sin embargo,

siempre había planteado sus proyectos imperiales más al estilo romano que al griego. Esto había sido, a juicio de Talleyrand, un error fatal, puesto que en tanto que las colonias fundadas por los griegos, que habían sido Estados autónomos precisamente del mismo tipo que los que poseían los británicos en la India, habían florecido, los romanos, con su imperio basado en la conquista, a la postre, «apenas habían logrado nada».³

La mayor parte de los teóricos británicos del imperio se habrían mostrado de acuerdo con él. Hacia 1657, los autores ingleses inmersos en una tradición ampliamente republicana ya afirmaban—como ha demostrado hace poco David Armitage—que, más que un Estado universal, el imperio inglés era un protectorado de diversos intereses. La corona inglesa, tal como lo expresó James Harrington—imitando la descripción que Cicerón realizara del imperio del último periodo de la República de Roma—no ejercía *imperium* sobre sus variadas dependencias, sino *patrocinium* (protectorado).⁴ Con todo, la comparación que mejor captaba la diferencia que los británicos percibían entre su imperio y el español, y en cierta medida el francés, era la misma distinción efectuada por Talleyrand entre los imperios de Grecia y de Roma.

Tal como vimos en el Capítulo 1, las tres acepciones del término *imperium*—como un gobierno limitado o independiente o «perfecto», como un territorio que englobaba más de una comunidad política y como la soberanía absoluta de un solo individuo—provenían directamente de las prácticas discursivas de los imperios romano, ateniense y macedonio. Los imperios romano y griego habían constituido, sin embargo, entidades políticas de muy distinto signo. A diferencia de los romanos, los atenienses habían fundado colonias que siempre se mantuvieron en calidad de socios independientes de la metrópoli... hijos, como los calificó Adam Smith, pero hijos emancipados.⁵ España, sin margen de duda, y Francia, de modo menos marcado, eran las verdaderas herederas de Roma. El imperio británico, en cambio, tal como aseguraba Andrew Fletcher en 1704, se parecía más a la Liga Aquea,⁶ la cual constituyó un modelo que más tarde aplicarían James Madison y James Wilson en sus propuestas para la estructura federal de los Estados Unidos.⁷ De acuerdo con esta imagen, las colonias inglesas habían sido proyectos privados, a diferencia de los asentamientos franceses y españoles, que fueron en gran medida promovidos por el Estado. De este modo podía afirmarse que los asentamientos británicos en el Nuevo Mundo habían constituido desde el principio comunidades políticas semi-independientes desde el punto de vista político e incluso posiblemente cultural. Cada una

de ellas era, en realidad, lo que más tarde designaría Kant como una *civitas hybrida*.⁸

Si bien con frecuencia contó con la aprobación de los propios franceses y españoles, esta diferenciación tan drástica entre un gobierno metropolitano liberal inglés y unos gobiernos despóticos franceses y español no llega tal vez a reflejar las múltiples complejidades que presidieron las relaciones de las coronas francesa y española con sus súbditos de América. Canadá había sido poblado en un principio por una empresa privada (aunque creada por un ministro de la corona) y aun cuando la mayoría de los conquistadores españoles de renombre acabaron asumiendo cargos administrativos reales, casi todos iniciaron su andadura en calidad de agentes privados. «Sus Majestades—observó el historiador oficial de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo—apenas contribuyeron a esta empresa ni con sus propiedades ni sus caudales, sino que ofrecieron sólo papel y palabras de aliento».⁹ Una importante región, que corresponde a la Venezuela actual, se colonizó incluso, allá por 1530, bajo los auspicios de una empresa financiada por una familia alemana, los Welser. Con el tiempo se hizo, no obstante, evidente que dichos inicios tendrían escasas repercusiones históricas. Una vez hubo tomado conciencia la monarquía española del potencial que tenía América en recursos minerales y humanos, la incorporó plenamente a la corona, en un grado que nunca alcanzarían las colonias británicas. En la Norteamérica y el Caribe franceses, la misma dependencia originaria de las inversiones privadas y la correspondiente independencia del control de la corona y la jerarquía eclesiástica duraron un corto periodo de tiempo y con ellas, desapareció todo resto de su anterior influencia política. Al igual que las colonias españolas, las francesas pasaron a ser, en términos legales, en la forma de ser administradas y en la concepción que de ellas tenían sus pobladores y quienes las gobernaban, una parte integrante del conjunto de la monarquía francesa. Los británicos tenían, por lo general, razón al asumir que sus asentamientos de ultramar fueron los únicos que mantuvieron las tradiciones de autonomía e iniciativa privada de sus inicios.

La distinción entre sus sociedades americanas y las creadas por los monarcas católicos españoles y franceses continuó siendo considerada por los británicos como un elemento crucial para el desarrollo de su propia identidad cultural y, a la postre, política. Esta distinción, que constituye el fundamento de la excepcionalidad norteamericana, tuvo una gran influencia en el concepto del «destino manifiesto» y todavía sigue determinando las actitudes, y a menudo la política, americanas con respecto a las repúblicas de habla hispana y portuguesa

del sur. De acuerdo con su historiografía, los primeros colonos ingleses no sólo habían sido individuos que actuaron por impulso propio, invirtiendo capital propio. También habían ido, precisamente por ello, a América no con intención de conquistar, como habían hecho sus vecinos; habían ido a «cultivar» y habían «mejorado».¹⁰ No habían ido a perpetuar una sociedad europea ya corrompida por las ambiciones absolutistas (y «continentales») de la monarquía de los Stuart; habían ido a construir una nueva, más justa, que luego sería republicana. A diferencia de las colonias españolas y francesas, que eran meros trasplantes de España y de Francia, los asentamientos británicos habían sido fundaciones lockeanas, literalmente creadas a partir del estado de naturaleza.

El virginiano Richard Bland—«el hombre más culto y lógico, el que más ha profundizado en el derecho constitucional», según lo definió Jefferson—insistió una y otra vez en este punto. «Cuando los súbditos se ven privados de sus derechos civiles o no les satisface la posición que ocupan en su comunidad», escribió en 1766,

tienen el derecho natural de abandonar la sociedad de la cual son miembros y retirarse a otro país. Ahora bien, cuando los hombres ejercen dicho derecho de irse de su país, recuperan su libertad e independencia naturales; la jurisdicción y la soberanía de los Estados que han dejado cesa; y si se unen y por consentimiento común toman posesión de un nuevo país y forman una sociedad política, se convierten en un Estado soberano, independiente del Estado del que se separaron.¹¹

Como había hecho anteriormente Jefferson—que utilizó una versión del mismo argumento—¹² Bland negaba que la corona tuviera derecho a cobrar impuestos a las colonias sin concederles una auténtica representación en el Parlamento. El poder metropolitano no tenía autoridad para limitar las libertades que habían adquirido los creadores de estas sociedades al ejercer su derecho a irse. «¿Acaso desembarcan como esclavos en América aquellos que embarcaron como hombres libres en Gran Bretaña?» había preguntado en 1774 James Wilson:

¿Están aquellos que huyeron de la opresión y la tiranía real y ministerial reducidos ahora a la condición de vasallos frente a aquellos que entonces sintieron la misma opresión? ¿De dónde proviene el fatal cambio? ¿Es éste el pago que se nos da por haber dejado a nuestros amigos y nuestro país, por afrontar los peligros del piélago, por cultivar una tierra yerma, habitada sólo por fieras y hombres salvajes, por ampliar los dominios de

la corona británica, por incrementar el comercio de los mercaderes británicos, por aumentar las rentas de los propietarios británicos, por elevar los salarios de los menestrales británicos? Los británicos deberían ruborizarse al plantear tamañas pretensiones. Los americanos se ruborizarían en caso de aceptarlas.¹³

La interpretación de los orígenes políticos de la América británica como acto voluntario de independencia podía, sin embargo, desgañarse fácilmente de la simple cuestión impositiva.¹⁴ Los ingleses, escribió el marqués de Mirabeau en 1758, habían sido «el más ilustrado de los pueblos de Europa en la conducta mantenida en el Nuevo Mundo». Si bien, en su opinión, la contradicción entre su amor por la libertad y su pasión por el lujo acabaría destruyéndolos, reconocía que habían sido los únicos que construyeron sus colonias en consonancia con «las leyes de las repúblicas, consejos y parlamentos».¹⁵ Debido a ello, eran los únicos que tenían posibilidades de eludir el destino que aguardaba a los demás imperios, no reformados, del Antiguo Mundo: la corrupción y el desmoronamiento final. (No fue culpa de Mirabeau el no haber previsto que sería precisamente lo que Adam Smith designó como los «modales republicanos» de los colonizadores ingleses lo que precipitaría la caída final del imperio de América.)¹⁶

Gran Bretaña se tenía así desde hacía tiempo como paradigma de Estado moderno: comercial, calculador e impasible ante las inquietudes trascendentales de signo cultural y religioso. Había creado, cuando menos según las apreciaciones de sus admiradores (ante todo franceses), un imperio que realmente podía compararse a la Liga Aquea imaginada por Fletcher. Todo ello pareció tomar, sin embargo, otro rumbo a raíz de la victoria británica y la incorporación de Canadá al finalizar la Guerra de los Siete Años en 1763. La creciente intransigencia de Gran Bretaña en relación a sus colonias, la insistencia en que debían pagar más impuestos y atenerse de forma más estricta a los dictados del gobierno central, sin auténtica representación parlamentaria, constituyó un intento de ejercer algo más parecido a la «despótica» administración que supuestamente ejercían las coronas española y francesa sobre sus colonias. ¿Cómo era posible, escribió Turgot al radicalista inglés Richard Price en marzo de 1778, que una nación que había conseguido tantos logros en las ciencias naturales—entre las cuales incluía «*celle du bonheur publique*»—hubiera concebido ese «absurdo proyecto de subyugar a América»?¹⁷ Aquello era, cuando menos desde la perspectiva del otro lado del Atlántico (y del canal de la Mancha) un intento, aunque defectuosamente organi-

zado y planificado, de crear algo que muy bien podía describirse como un «imperio británico» en América. No obstante, tal como señaló en 1755 el que más tarde sería segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, dicho concepto no existía ni en el derecho natural ni en el derecho común inglés. Era, según afirmaba, del dominio exclusivo del «lenguaje de los periódicos y los panfletos políticos». La expresión «la corona imperial de Gran Bretaña», insistía,

se introdujo en alusión al imperio romano, a fin de insinuar que la prerrogativa de la corona imperial de Inglaterra, como la del emperador romano, se funda en la máxima, *quod principi placuit legis habet vigorem*, y en lugar de englobar las dos sedes del parlamento en la idea de la corona imperial, su objetivo era insinuar que la corona era absoluta y no necesitaba de lores ni comunes para elaborar o dispensar leyes.¹⁸

Gran Bretaña y sus dominios constituían, como habían reconocido Harrington y Fletcher, no un «imperio» en cualquiera de sus acepciones habituales, sino algo más parecido a una confederación de Estados. Las colonias americanas no formaban ni habían formado nunca «parte del reino de Inglaterra», como sin duda lo formaron las españolas, y en cierto sentido, las francesas. Eran «dominios separados y distintos». Así lo expresó un anónimo colaborador del *Pennsylvania Journal* en marzo de 1776:

En una confederación de Estados independientes entre sí y a la vez unidos bajo una sola cabeza, que es como yo concibo la realidad actual del imperio británico, todo el poder legislativo debe subsistir completo y en plenitud en cada parte y las respectivas legislaturas deben ser totalmente independientes unas de otras.¹⁹

De la atribución de unos orígenes lockeanos a las colonias se derivaba que puesto que habían surgido del estado de naturaleza no podía existir ninguna autoridad previa entre los colonizadores. Esto significaba que eran libres de fundar la clase de sociedad que quisieran—o para el caso, no fundarla—o bien que la autoridad recaía en la persona que les había concedido el derecho a abandonar la comunidad política en la cual habían nacido, es decir, la *persona* del rey. Había sido él el que había concedido en primera instancia a los colonos, en palabras de Bland, «licencia para trasladarse al nuevo país y asentarse en él», por lo cual los colonos no eran súbditos del Parlamento, sino del monarca.²⁰ Los primeros pobladores, añadía James Wilson en 1774, retomando una línea argumentativa similar,

tomaron posesión del país en nombre del rey; hicieron tratados y guerras con los indios en delegación de su autoridad; ocuparon las tierras por sus cesiones y le pagaron a él las rentas a ellas reservadas: establecieron gobiernos sancionados por su prerrogativa o en virtud de sus cartas.²¹

Para estos «angloamericanos» las colonias era «naciones independientes» o, como alegaban algunos, «Estados independientes distintos entre sí, pero conectados bajo la autoridad de un mismo soberano». ²² De ser esto cierto, tal como había reconocido en 1774 sir Francis Barnard, gobernador de la Bahía de Massachusetts—recurriendo a la misma terminología legal aristotélica y romana empleada por los españoles—todas las colonias británicas de América constituían «Estados perfectos». ²³

La definición final de la condición legal de las colonias angloamericanas realizada por Barnard es idéntica a la que había empleado en 1539 Francisco de Vitoria para describir la relación que mantenían Castilla, Aragón y el ducado de Milán y a la que utilizó con igual fin unos años más tarde Francisco de Suárez en el caso de las coronas de Castilla y Portugal. ²⁴ Todos estos territorios eran también *perfectae communitates*, situadas bajo la jurisdicción universal de un único príncipe, lo cual les garantizaba derechos ilimitados a la autodeterminación, con excepción del derecho a modificar la naturaleza de su constitución. De manera similar, para Barnard, la constatación de que los «dominios» británicos de América eran «perfectos» indicaba que aun sin ser formalmente reinos, como lo eran los diversos Estados que componían el imperio español, su relación con la madre patria debía ser de todos modos análoga a la que sostenía Hannover con la corona de Inglaterra. También efectuó esta comparación el autor de un opúsculo titulado *Candid Observations*, aparecido en 1765. Los habitantes de Hannover, señalaba, «siguieron gobernándose de acuerdo con sus propias leyes bajo la supervisión general del magistrado supremo de Inglaterra y de sus fieles delegados y oficinas en el extranjero», de forma que «con respecto al Parlamento y al poder de imponer impuestos, todos los dominios del príncipe... deberían estar en pie de igualdad». ²⁵ La cuestión debatida por Vitoria era el derecho que amparaba a los príncipes de dichos Estados a emprender una guerra sin el consentimiento del «soberano supremo»; para Barnard y el autor de *Candid Observations*, la cuestión conflictiva era, una vez más, la de las cargas impositivas sin representación parlamentaria. Lo que estaba en juego en ambos casos era lo que alguien denominó las «marcas» de la soberanía, y tanto Vitoria como Barnard reconocían que al afirmar que los dirigentes de dichos Es-

tados tenían derecho a declarar la guerra o a recaudar impuestos, en realidad estaban atribuyéndoles una total autonomía política. Como comentó Jared Ingersoll en 1765, suprimir el derecho de Gran Bretaña a cobrar impuestos equivalía a convertir América en un reino aparte.²⁶

Con esto no quiero dar a entender la existencia de ninguna relación textual ni formal entre la obra de Vitoria y la de Barnard. Los dos empleaban el mismo vocabulario aristotélico y legal usado por los romanos y, por muy distintos motivos, ambos querían llegar exactamente a las mismas conclusiones. La semejanza de sus argumentos merece más bien ser destacada por cuanto sirve para demostrar hasta qué punto, en su intento de crear a partir de 1763 un imperio plenamente centralizado, la corona británica había impulsado a los «angloamericanos» a replantear su relación con la metrópoli en los mismos términos con los que los castellanos habían contemplado antes de 1700 su relación, no con América sino con los Estados europeos del imperio.

Esto también nos sirve para dirigir la atención hacia un aspecto capital de dicha relación a la que de modo implícito se referían Vitoria y Barnard: su lugar dentro de una estructura legal más amplia. Las implicaciones de los argumentos empleados por Barnard, Wilson y otros eran que si el rey fue el que de modo exclusivo concedió a los primeros colonos el derecho a asentarse en América, éstos habían ido allí en condición de vasallos feudales y no de ciudadanos libres. Y si la realidad era ésta, entonces su relación con la corona era muy parecida a la que mantenían los franceses y los españoles.

En la práctica legal eran, sin embargo, muy variadas las condiciones bajo las que se habían cedido las tierras en América. A pesar de que los británicos tachaban insistentemente de «feudal» la política de asentamientos española, la corona de Castilla no creó ningún feudo en ninguna de sus posesiones de ultramar. Las famosas encomiendas, en virtud de las cuales ocuparon los colonizadores los antiguos territorios de los indios no eran, como vimos en el Capítulo 3, cesiones de tierras, sino de fuerza de trabajo. No otorgaban ningún derecho formal de propiedad y de ningún modo entrañaban relaciones feudales entre el colonizador y el colonizado. Sólo Francia implantó de manera generalizada feudos en su imperio de ultramar y, aun éstos, pese a estar planteados en un lenguaje de compromisos feudales, eran, a todos los efectos simples concesiones de tierra. Ni siquiera conferían nobleza y si bien en 1633 casi todos los señoríos estaban en manos de nobles, hacia 1763, la mayoría estaban ocupados por plebeyos.²⁷ Francia y España permitieron, no obstante, desde el principio la posibilidad de una aristocracia criolla. La constitu-

ción que redactaron Locke y Shaftesbury para Carolina preveía la instauración de una extraña combinación de títulos de distinta procedencia (barones, landgraves y caciques), que nunca se llevó a la práctica.²⁸ Tal como observaron Edmund y William Burke en 1757, aun cuando «se conocen muy pocas modalidades de gobierno que no imperen en una u otra de nuestras "plantaciones"... en ninguna de ellas ha surgido nada comparable a una verdadera aristocracia hereditaria». ²⁹ Una de las razones de ello, y que más tarde explotarían para sus propios fines los revolucionarios americanos, era que las colonias inglesas habían sido, en un sentido muy específico, fundaciones feudales, puesto que todas las tierras de América habían sido originariamente cedidas en «arriendo libre y común» del señorío de East Greenwich de Kent.³⁰ Es decir que desde el punto de vista legal formaban parte de las tierras reales, y no era posible concebir ninguna parte de la *terra regis* que no perteneciera a un señorío real de Inglaterra. La tierra de Irlanda se ocupaba, por ejemplo, como dependiente de Carregrotian, de Trim, de Limerick o del Castillo de Dublín, y cuando Carlos II cedió Bombay a la Compañía de las Indias Orientales, la cedió también en «arriendo libre y común» del señorío de East Greenwich.³¹ Debido a esta ficción puramente legal se podía asimismo afirmar, en cuestiones impositivas y de representación, que las colonias eran exactamente iguales que cualquier condado inglés. No obstante, de ser así las cosas, los colonizadores deberían haber disfrutado de todos y cada uno de los derechos de que disfrutaban los ingleses. «¿Qué han hecho—preguntaba con sarcasmo Benjamin Franklin—esos habitantes de East Greenwich de Kent para que se restrinjan, más que a los otros habitantes de Kent, sus manufacturas y su comercio?».³²

La ficción de que «Nueva Inglaterra se hallaba dentro de Inglaterra» fue una de las causas de que los interesados en hacer valer esa dependencia semifeudal de la colonia con respecto al rey, y no al Parlamento, se esforzaran en negar que los colonos se hubieran limitado simplemente a comprar sus tierras a los indígenas americanos. No en vano, si podía demostrarse que los colonos habían adquirido, de hecho, sus tierras por el mismo procedimiento utilizado por cualquier europeo en Europa, difícilmente podían afirmar que la ocupaban con independencia del Parlamento.³³ Éste es el motivo por el que un personaje como Thomas Jefferson se mostraba dispuesto a alegar, en contradicción con su ideario general, que los «angloamericanos» se habían ganado el derecho a la autodeterminación mediante conquista:

Derramaron su sangre para hacerse con la tierra donde se asentaron; invirtieron sus fortunas para instalarse con eficacia allí; para sí mismos lucharon, para sí mismos conquistaron y para sí mismos exclusivamente tienen derecho a ocupar.³⁴

Tal como señalara en 1722 William Strahan, traductor y comentarista de *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, de Jean Domat, si las colonias americanas eran parte integrante de la tierra real, de ello podía deducirse la existencia de

una gran afinidad entre ellas [las colonias inglesas] y las colonias de los españoles y de otras naciones que han efectuado asentamientos entre los indios de esas regiones. Pues las cesiones efectuadas por nuestro rey de las extensiones de tierra de ese país para la implantación de colonias y de asentamientos parecen ser una imitación de las cesiones hechas por los reyes de España a los propietarios de tierras de las colonias españolas, en las mismas condiciones y en consideración a los mismos servicios que deben prestar los beneficiarios. Dado que el gobierno de las colonias españolas y el derecho de los propietarios de las tierras de éstas dependen en gran medida de la aplicación del derecho civil y feudal, como puede comprobarse en el erudito tratado de Solórzano, *De Indiarum rerum*, el conocimiento de dichas ramas de derecho podría ser igualmente útil para mediar en cualquier controversia que pueda surgir en lo tocante a las obligaciones y a la pérdida de la propiedad y tierras de nuestras colonias inglesas.³⁵

James Otis restó importancia a esta afirmación comentando que era «humildemente de esperar que las tierras, así como las libertades de los colonos británicos, no estén supeditadas a una tenencia tan endeble como la de los españoles y los franceses».³⁶

Los argumentos de Strahan resultaron, sin embargo, más inquietantes de lo que daba a entender la observación de Otis.³⁷ La gran fuerza del argumento lockeano—que ningún hombre necesitaba permiso de ninguna autoridad para abandonar, si así lo deseaba, la sociedad civil—consistía en que, si las colonias habían sido en efecto fundaciones lockeanas, los colonizadores no debían obediencia a nadie en quien no hubieran depositado voluntariamente su confianza. Con anterioridad a la Declaración de Independencia eran, no obstante, pocos los que estaban dispuestos a ir tan lejos. A pesar de recurrir a Locke, buena parte de los colonizadores acreedores de mayor influencia eran expertos en cuestiones legales que mostraban por lo general un gran respeto por el derecho común inglés y no acababan de estar conformes con los argumentos basados enteramente en prin-

cipios abstractos tomados del derecho natural. Aun concediendo que, como insistían John Adam y otros, las leyes por las que se regían los colonizadores no derivaban «del parlamento ni del derecho común [inglés], sino del derecho natural y del pacto firmado con el rey en nuestras cartas», admitían sin reparos que dichas cartas se habían realizado, en un principio, *in iure feudali* y estaban basadas en el derecho, reconocido por el derecho común inglés, que el rey tenía a impedir que sus súbditos abandonaran su reino si éste era su deseo: el derecho de *ne exeat regno*.³⁸

Tal como parecía haber advertido Strahan, esta variedad modificada del argumento lockeano, que rescataba la lealtad para con un lejano rey, se aproximaba mucho en términos legales a una modalidad de vasallaje feudal, pues si el rey había sido la única fuente de autoridad de la fundación primigenia, y si la legitimidad debía emanar de los orígenes históricos de la colonia, no había nada que mediara entre los colonizadores y la «franca buena voluntad» del monarca. La interpretación que Strahan hizo de Domat tomó un cariz aún más inquietante a raíz de que muchos británicos consideraran esos orígenes supuestamente feudales de las colonias como un poderoso componente de las reclamaciones que dirigieron contra los colonizadores americanos durante la denominada crisis de la *Stamp Act*, suscitada por un decreto que pretendía aumentar la recaudación de las colonias imponiendo el uso de papel timbrado en toda clase de documentos.

La respuesta que formuló Otis a este respecto fue que además de haber sido fundadas (en el caso español) sobre la base de la soberanía otorgada por un papado que había «ejercido sin derecho durante siglos el más abominable poder sobre los príncipes», las colonias españolas y francesas se habían gobernado en todo momento de acuerdo con un código de leyes que habían confeccionado para ellas sus respectivas metrópolis. Las colonias británicas de América, por el contrario, a despecho de su dependencia nominal del señorío de East Greenwich, siempre habían redactado su propia legislación ya que prácticamente todas las cartas coloniales concedían la «libertad de promulgar entre ellos las leyes que crean convenientes»,³⁹ lo cual podía interpretarse como una negación de cualquier residuo de compromiso feudal para con el rey inglés que hubiera podido quedar de la fundación primigenia de la colonia. «En muchos casos, las colonias han actuado en realidad—observó John Campbell en 1755—como si se considerasen Estados independientes, regidos por sus propios estatutos, más que provincias de un mismo imperio».⁴⁰

La autonomía legislativa de las colonias británicas de América presentaba, en efecto, un marcado contraste con las estrechas rela-

ciones jurídicas existentes entre la Francia y la España metropolitanas y sus colonias hasta finales del siglo XVIII. La constitución ideada por Locke y Shaftesbury para Carolina—aun siendo unos estatutos para un Estado que habría sido muy distinto de la Inglaterra del momento—es lo más parecido a un sistema legal elaborado en la metrópoli con objeto de determinar la estructura de la sociedad colonial, y por lo demás, nunca se llevó a la práctica.

En 1799 James Madison se oponía al proyecto de crear un sistema legal unitario para todas las antiguas colonias de los nuevos Estados Unidos, alegando que

tanto si se interpreta que los primeros colonizadores trajeron consigo el derecho o si lo hicieron suyo por adopción, no es menos cierto que era el derecho exclusivo de cada colonia dentro de sus respectivos límites y que ellos no lo tenían por un derecho extensible que operara en todo el conjunto como una sola sociedad.

Ante la inexistencia, concluía, de un derecho compartido ni siquiera para dos colonias y de «una legislatura unitaria mediante la cual pueda expresarse la voluntad común en forma de ley», no podía haber un derecho capaz de actuar como expresión de la totalidad del imperio, de tal modo que:

La pretensión de Gran Bretaña de elaborar leyes para los demás miembros del imperio *en todos los casos sin excepción* llevó a descubrir que no tenía derecho a elaborar leyes para ellos *ni en un solo caso*.⁴¹

En este sentido, tal como afirmó John Adams formulando una postura que muchos compartían, el imperio británico no tenía la más mínima existencia *legal*, puesto que la competencia de que gozaba cada colonia para redactar su propia legislación también determinaba la clase de asociación que mantenía con la metrópoli. «Las distintas comunidades que conforman un imperio—explicaba Richard Price en 1776—carecen de conexiones que produzcan una necesaria reciprocidad de intereses entre ellas». Dado, además, que «todas las leyes son disposiciones o regulaciones establecidas por consentimiento de todos a fin de obtener protección y seguridad», sólo podían, por definición, ser redactadas e impuestas por sus futuros beneficiarios. A la pregunta: «¿No existen causas en razón de las cuales un Estado pueda merecer una justa autoridad sobre otro, aun sin consolidarla mediante una adecuada representación?» respondía sin paliativos que «no existen tales causas». ⁴² El hombre obligado a registrarse

por las leyes de otros no es más que un esclavo. «En la medida», decía Price,

como sucede en cualquier otro caso, en que la aplicación de una causa viene a restringir la capacidad de autogobierno, en igual medida se introduce la esclavitud. Tampoco creo yo que pueda formularse una idea más precisa que ésta que toma en consideración la libertad y la esclavitud.⁴³

Según este punto de vista, lo que vinculaba a los angloamericanos a Gran Bretaña no era un sistema legal ni un conjunto de compromisos, feudales o de otro tipo, sino la lealtad compartida con respecto a un único soberano.⁴⁴ Si como apuntaban todos estos argumentos, los colonizadores británicos eran agentes legales dotados de plena autonomía, cuyos derechos de propiedad derivaban de sus propias acciones por vía de una cesión inicial por parte del rey, por entonces ya muy remota; si la relación que mantenían las colonias entre sí e individualmente con el poder metropolitano estaban canalizadas por una pura deuda personal hacia un soberano común, debía interpretarse, de acuerdo con Tucídides y Grocio, que la relación entre colonia y metrópoli no se fundamentaba en el concepto de las obligaciones legales, y mucho menos fiscales, de los colonizadores, sino en la «devoción que profesaban por la ciudad a la que se remontaban sus orígenes». ⁴⁵ La devoción exigía, naturalmente, un alto grado de respeto por parte del soberano. La indignación que impregna buena parte de los alegatos revolucionarios de los americanos fue avivada por la sensación de que las *Stamp Acts* y todas las tentativas de negar la independencia legislativa de los colonizadores, su derecho a una representación auténtica y no meramente virtual, violaban la imagen del «imperio británico» como moderna versión de la Liga Aquea, o colectividad de Estados libres unidos por voluntad de todos sus miembros. Violaba el profundo convencimiento comunitario de que todos los súbditos de Su Majestad eran, a pesar de los orígenes y la naturaleza de su sujeción y a despecho del lenguaje feudal con el que todavía se expresaban incluso a finales del siglo XVIII dichas relaciones, seres libres e iguales.

II

Las estructuras legales de los imperios español y francés eran, en casi todos los aspectos, muy distintas de las del británico. Desde Enrique IV, los monarcas franceses habían planificado la situación legal

de sus colonias de manera bastante análoga a la de las de España. Canadá había sido, sin embargo, poblado desde sus inicios mediante el procedimiento de cesiones feudatarias, el cual había evitado aplicar, de forma explícita y sin reparar en medios, la corona española, y en la práctica administrativa los reducidos y aislados asentamientos que componían la colonia se gobernaban en gran medida por la negociación continuada entre los ministros de la corona y los pobladores.⁴⁶ Todas las colonias francesas de ultramar, aun cuando siempre mantuvieron dicha denominación, eran a efectos legales y con frecuencia por el tratamiento que recibían de la metrópoli, «provincias del reino de Francia, igual que Normandía, Bretaña y Guyena», tal como declaró en 1785 el abogado Paul-Ulrich Dubuisson.⁴⁷ La integración de todos los residentes de las colonias en la corona de Francia y la supeditación de su gobierno a un cuerpo de leyes administrativas locales llamado el *coutume de Paris*—comparable por sus consecuencias posteriores a la incorporación de América a la corona de Castilla—determinaron la estructura ideológica del imperio hasta la caída de la propia monarquía.⁴⁸ Asimismo, al igual que sucedió con la supuesta igualdad acordada a todos los miembros del *imperium* español, a la larga supondría un quebradero de cabeza para la administración en los años de ocaso. «El pueblo de Santo Domingo—informó en 1792 un grupo de colonos a la Asamblea Nacional—forma parte del pueblo francés constituido por la soberanía del imperio francés». Las colonias, señalaban, recelosos de la influencia que ejercían los abolicionistas en la Asamblea, eran por lo tanto inalienables, ya que no eran propiedad de la Asamblea Nacional, como tampoco eran «propiedad de Francia ni de la corona, ni pueden ser bajo ningún concepto cedidas a otro poder».⁴⁹

En España la monarquía siempre había estado más ligada a las concepciones de imperio del derecho romano que cualquiera de sus competidoras europeas. Francisco de Vitoria y sir Francis Barnard habían utilizado la misma noción aristotélica de *perfecta communitas* para describir la situación de las diversas partes de sus imperios respectivos. No obstante, mientras que para Barnard el «soberano supremo» que mantenía unido el imperio británico era una cómoda ficción legal, el «King in Parliament», para Vitoria era el sacro emperador romano. En tanto que Barnard se refería a convenios limitados entre monarquías individuales gobernados por el derecho de las naciones, el *ius gentium*, Vitoria tenía en mente, aun cuando personalmente no lo aprobara, el concepto más amplio de imperio como encarnación de un *ius*, o, en el vocabulario del derecho romano que había adoptado el imperio medieval germánico, un *ius publicum*. A di-

ferencia del imperio británico, la monarquía española constituía un solo cuerpo legislativo desde los Países Bajos hasta Chile. «Su Majestad—escribió Lope de Vega en una de sus obras, expresando uno de los elogios más repetidos en la época—tiene imperio que deste al otro hemisferio no parte jurisdicción».⁵⁰ Bajo la égida del imperio, la legislación y las instituciones que protegían en Castilla a los súbditos del rey, también protegían a los de Perú. Las poblaciones de la América española gozaban de las mismas «libertades, inmunidades, privilegios y costumbres libres en sus provincias»—por utilizar algunos de los términos empleados en la Asamblea de Maryland de 1648—⁵¹ que cualquier persona nacida en Castilla. La diferencia capital entre la América española y la británica era que en los «reinos de las Indias», como en los de la península, estos privilegios eran concesiones y no derechos,⁵² y éstas habían sido, además, decretadas en Europa y no en América.

Al ser la única de las tres potencias coloniales europeas que gobernaba un imperio homogéneo dotado—al menos en teoría—de una única identidad, España fue asimismo la única potencia que redactó un detallado sistema legislativo para las colonias que a la vez pretendía definir su relación con la metrópoli: la *Nueva Recopilación de leyes de los reynos de las Indias* promulgada en 1680.⁵³ Tal como sostenía Juan de Solórzano y Pereira, autor de la compilación del nuevo código, los imperios distantes sólo podían sostenerse por medio de déspotas autóctonos aliados—opción que, como indicaba, se había planteado y rechazado Cicerón—o a través de un rígido y firme código legal. Los emperadores romanos habían comprendido esta necesidad, razón por la cual Solórzano afirmaba que los decretos (cédulas) de los reyes castellanos debían ser considerados como los «prescriptos o cartas de los emperadores romanos, de que hay tantos textos, y aun títulos enteros en el derecho común». De igual forma, así como el *corpus juris civilis* había sido el decreto del bien común—la *salus publici*—así las leyes de Indias (que estaban inspiradas en el Digesto) procurarían la *salus publici* de los habitantes de la América española.⁵⁴ Esta estrecha asociación legal entre la madre patria y las colonias originaría con el tiempo violentos conflictos entre la población criolla y Madrid. «Nuestra suerte—dijo en 1819 a los futuros legisladores de Venezuela Simón Bolívar, «Libertador» de gran parte de la América central y meridional—ha sido siempre puramente pasiva, nuestra existencia política ha sido siempre nula... estábamos abstraídos, ausentes del universo en cuanto era relativo a la ciencia del gobierno».⁵⁵ Los británicos también atribuían los, a su juicio, escasos progresos sociales y económicos de las colonias españolas a la

pretensión española de seguir, en palabras de sir Josiah Child, «la misma política y gobierno civil y eclesiástico en esas colonias que la que aplican en su madre patria».⁵⁶ La réplica de Campomanes, que aun admitiendo que esto era cierto en teoría, reprochaba a Child el no haber tenido en cuenta que la homogeneidad legal del imperio raramente se observaba en la práctica, no lograba rebatir la cuestión de que a las colonias españolas les había sido negada la autonomía legislativa y que era precisamente dicha autonomía el único elemento que hubiera podido capacitarlos para competir con sus vecinos del norte.⁵⁷

En paralelismo con la imagen de su identidad legislativa, España fue asimismo la única potencia europea que desarrolló una administración imperial plenamente articulada. Las instituciones de gobierno representativas de la península—las cortes castellanas y las *corts* aragonesas—nunca se exportaron a América. Tampoco se planteó nunca la cesión de competencia legislativa independiente a organismos locales como ayuntamientos, audiencias y cabildos. Todo el mundo tenía derecho a apelar ante los distintos tribunales reales, las audiencias, a las que estaba supeditado incluso el propio virrey. (Esto también incluía a los indios que, habiendo adoptado rápidamente las costumbres de sus amos, hacia finales del siglo xvi eran tildados no sólo de vagos, lascivos e idólatras, sino también de litigantes.) Al expirar el plazo de su cargo, todos los funcionarios debían someterse a una auditoría—llamada residencia—que daba la oportunidad a todos los habitantes de la colonia de ventilar sus quejas contra él. Todas las disposiciones partían de Madrid y volvían a Madrid pasando por el Consejo de Indias. Es evidente que las cartas mediante las cuales las colonias británicas gozaban, en casi todos los casos, de la «libertad de promulgar entre ellos las leyes que crean convenientes», habrían sido impensables en cualquier territorio de la monarquía española a partir de 1521, puesto que todo grado de actuación legislativa independiente habría sugerido que el bien común de América podía diferenciarse del de Castilla.

Los diversos sectores del imperio se gobernaban desde Madrid a través de distintos consejos, que gozaban de poderes iguales después del Consejo Real. Ni en Inglaterra ni en Francia existía algo comparable, por la evidente razón de que en el primer caso las colonias se consideraban entidades que se autogobernaban, y en el segundo, éstas tenían una situación legal idéntica a la de la ciudad de París. No obstante, el mismo Charles Davenant, una de las personas que más criticó el expansionismo español, llegó a recomendar el establecimiento en Inglaterra de «una constitución similar a la que en España

llaman el Consejo de Indias». Y, previendo la extrañeza que podía producir en los pueblos británicos, en especial en la última década del siglo xvii, el que pusiera como modelo a España, puntualizaba que, «cualquiera que revise las leyes e instituciones políticas de España, verá que están tan bien elaboradas e ideadas con tan buen hacer y sabiduría como no puedan hallarse quizá otras mejores en el mundo». Lo que, a su juicio, había producido resultados tan catastróficos no se debía a «una mala o errónea proyección, sino a la negligencia, relajación e irregularidad en la ejecución de las disposiciones de los consejos», lo cual era, naturalmente, atribuible, a sus creencias religiosas y a la falta de libertad característica de todas las monarquías católicas.⁵⁸

Lo que tal vez no acabara de captar Davenant es que el sistema de consejos era un reflejo de la estructura particular de la monarquía española. En el epicentro del aparato jurídico e institucional de la monarquía se hallaba la persona del propio rey, dotado de una autoridad legislativa absoluta. La célebre frase del jurista Ulpiano «lo que place al príncipe tiene vigor de ley» (*Quod principi placuit legis habet vigorem*),⁵⁹ que habían suscrito todos los monarcas españoles, además de definir un derecho legislativo, describía una relación, según la cual la vinculación del monarca con sus pueblos se plasmaba a través de su persona legal, su *persona ficta*. «La máxima fundamental de la jurisprudencia española en lo referente a América—observó el historiador escocés William Robertson—es considerar que lo adquirido allí corresponde por derecho a la corona más que al Estado».⁶⁰ Esto fue lo que impulsó a la corona de Castilla a gobernar América por medio de una institución aragonesa—el virreinato—que en un principio se había fundado con la intención de sustentar la ficción de la presencia simultánea del rey en Aragón y en Nápoles. En América, como en Nápoles, se exhibía constantemente la persona legal del rey. Con ocasión del entierro de Carlos V, sus exequias se representaron íntegras, con catafalco vacío incluso, en todos los virreinos de la monarquía, con el virrey haciendo el papel de Felipe II. Para recibir a los emisarios, se celebraban complicadas ceremonias triunfales destinadas a evocar una continuidad entre el virrey y los cónsules romanos y apuntalar el menguante prestigio de los conquistadores que lo habían antecedido.⁶¹

El propio Adam Smith señaló con cierto desagrado las grandes sumas de dinero que se gastaban en dichas recepciones: «Estas ceremonias no sólo se sufragaban con impuestos reales desembolsados por los ricos colonizadores en dichas ocasiones, sino que también sirven para introducir entre ellos el hábito de la vanidad y del dispendio en

toda suerte de ocasiones», escribió, sin reparar en su significado político.⁶² Cuando el hijo de Hernán Cortés, Martín, marqués del Valle de Oaxaca, se rebeló en 1565-1568, lo primero que hizo fue pasear por toda la ciudad de México llevando el estandarte real y mandar fabricar una medalla con su efigie en una cara y la de Felipe II en la otra. El virrey no dudó en interpretar el significado de dichos actos como un intento de apropiación de la persona real y los magistrados que lo juzgaron los describieron con mordacidad, afirmando que, «toda la fiesta enderezándose a que el dicho marqués había de ser rey desta tierra».⁶³ Nada remotamente parecido podría haber tenido lugar, como es obvio, en la América francesa ni en la británica.

Estas actuaciones eran lo que Judith Shklar describió—aunque refiriéndose a los procesos de las elecciones democráticas—como «rituales consecuenciales», que sirven para «legitimar e imponer a los burócratas y sus políticas», pero que también tienen consecuencias políticas reales.⁶⁴ La concepción imaginaria en la que se asentaban estos rituales y que sustentaba a las diversas comunidades políticas integradas en la monarquía española era que, en expresión de Juan de Solórzano y Pereira, «los reynos se han de regir y gobernar como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos».⁶⁵ Si bien Solórzano aludía a América, es significativo que esta observación suya, tantas veces citada, fuera tomada palabra por palabra, de un tratado sobre los dominios italianos de la corona de Castilla escrito por el milanés Camilo Borello.⁶⁶ Igual noción formularon, con ligeras variaciones, Soto y Suárez, aplicándola a la monarquía en su conjunto.⁶⁷ Para todos estos autores, esto no era sólo una petición para que el monarca respetase las costumbres de cada lugar—aunque este aspecto también estaba incluido—sino una reafirmación de la distinción entre la persona real del rey y su persona legal.

Esto también apuntaba hacia otro hecho que habría de tener tremendas consecuencias en la segunda mitad del siglo XVIII. En una sociedad multicultural, cuyos miembros gozaban en teoría de la misma categoría legal, la única distinción que cabía entre los súbditos del rey era su lugar de nacimiento. La afirmación de Solórzano de que el rey debe tratar cada uno de sus dominios como si no fuera soberano de ningún otro, va incluida en un razonamiento dedicado al derecho de designación de los beneficios eclesiásticos (razonamiento que, en diversas modalidades, tendría importantes repercusiones entre la elite criolla en el siglo XVIII). «Los hijos nativos», argumentaba, deberían tener preferencia, no sólo porque así había sido siempre costumbre en la península, sino por la razón evidente de que «sus progenitores las pueblan, habitan y defienden y con su sangre, sudor y trabajo las

descubrieron» y así las Indias tenían derecho a la recompensa de los cargos tanto eclesiásticos como seculares. Este argumento sería uno de los puntos en que basaron los pobladores españoles sus reclamaciones de autodeterminación.

Personalmente Solórzano no defendía, como así lo interpretaron al parecer sus lectores ingleses, en particular James Abercromby,⁶⁸ los derechos de los criollos a administrar sus propios asuntos; el derecho que postulaba era casi opuesto: el de aproximación a la persona legislativa de su rey. El interés por ocupar cargos era lo que Solórzano denominaba «el cuidado de la *respublica*». Si se les negaba esta posibilidad a los criollos, perderían, a su parecer, todo anhelo de virtud y quedarían reducidos a la indolencia y el vicio, lo cual redundaría en perjuicio de toda la comunidad. No obstante, los derechos naturales de los criollos, conferidos en razón de su lugar de nacimiento, únicamente eran, en todos los casos, derechos para actuar con capacidad ejecutiva en nombre del monarca. En ningún momento da a entender Solórzano que el lugar de nacimiento, el desembolso de capital o la participación en conquistas, reales o ficticias, confiera a los súbditos del monarca el menor poder legislativo. Todo lo más que garantizaban estos supuestos era una dependencia más próxima y más íntima de la corona, que Bolívar describiría más tarde como la «tiranía activa» de que disfrutaba el mandarinato chino.⁶⁹ Y tras esta reivindicación se hallaba una visión muy personal, y en este sentido genuinamente feudal, de la relación entre el soberano y su súbdito. Esta era la que alentaba el secretismo que, desde el punto de vista británico, había caracterizado siempre a la monarquía «continental», el «*secret du roi*» y el «*arcana imperii*» que, como observó con desaprobación Jefferson, habían dado al monarca el privilegio de acceso a un conjunto de leyes al que por justicia natural deberían haber podido acceder todos.⁷⁰

Si bien es fácil hallar en Francia un parecido lenguaje de dependencia personalizada y una interpretación similar del vasallaje, la conceptualización británica de la relación entre el rey y las colonias parte de bases diametralmente distintas. Para españoles y franceses, la identidad del monarca era concomitante con su poder para elaborar y promulgar leyes. Para los británicos, sobre todo a partir de 1688, los dos aspectos estaban claramente separados. Para expresarlo en los términos neotomistas empleados en España (y que con tanta saña ridiculizó Hobbes), los monarcas castellanos ostentaban tanto la *potestas* que emana sólo de Dios como la *auctoritas* conferida por la comunidad a la magistratura. En Gran Bretaña, éstas estaban repartidas entre el rey y el parlamento. De este modo, la afirmación americana de que el origen de las colonias derivaba de una concesión otorgada

por el rey de Inglaterra podía interpretarse como una eliminación de todo lazo legal entre las colonias y la metrópoli. Así, cuando John Adams declaraba en 1775 que el imperio británico estaba unido en la persona del rey inglés, pero no del «*King in Parliament*», estaba negando precisamente cualquier clase de entidad legal al rey.⁷¹ Madison, que comprendía a la perfección el peso teórico que conllevaba la noción de comunidad perfecta contenida en el derecho romano, reconocía con nitidez dichas diferencias. «El principio fundamental de la Revolución—escribió—era que las colonias eran miembros, coordinados entre sí y con Gran Bretaña, de un imperio unido por un soberano ejecutivo común, pero no unido por un soberano legislativo común».⁷²

Tanto los españoles como los británicos acabarían rebelándose—los españoles, por lo demás, se habían rebelado repetidas veces a lo largo del siglo xvii—sobre la base de que sus respectivos monarcas no habían cumplido lo que se esperaba de un monarca. La estrecha asociación mantenida por la corona inglesa con sus propias instituciones representativas a partir de 1688, el concepto del «*King in Parliament*» como definición de la misma monarquía, hacía empero imposible que los ingleses rindieran lealtad a la persona del rey al tiempo que oponían resistencia a los agentes del rey. El tradicional grito europeo de rebelión, que repitieron Hidalgo y Morelos en México en 1810, de «Viva el rey, abajo el mal gobierno» carecía de sentido cuando el rey era percibido, en palabras de Jefferson, como «el supremo dignatario del pueblo, sujeto a las leyes y dotado de un poder limitado», y por tanto inferior a lo que en su expresión era «la gran maquinaria de gobierno».⁷³

III

A diferencia de los británicos y españoles, las poblaciones de colonizadores franceses nunca pretendieron independizarse de su madre patria. Mucho antes de que se dieran las condiciones políticas y culturales necesarias para mantener una revuelta prolongada, el primer imperio francés de ultramar había dejado prácticamente de existir. Con la aplicación del Tratado de París del 10 de febrero de 1763, que puso fin a la Guerra de los Siete Años, la presencia francesa en América quedó reducida a las islas del Caribe, las más importantes de las cuales eran, a efectos políticos y económicos, Guadalupe y Santo Domingo. Allí no había, como en Canadá, poblaciones indígenas con las que pudieran llegar a integrarse los colonizadores. Hacia media-

dos del siglo xviii, en esas colonias habían surgido economías de plantación muy similares a las de las islas británicas de la misma zona, que, al igual que éstas, contaban con una nutrida población de esclavos. Desde 1763, el principal objetivo de los colonos franceses era procurar la abolición de las leyes restrictivas que controlaban el comercio colonial, denominadas *L'Exclusif*,⁷⁴ y a la vez su firme mantenimiento dentro de los límites protectores de la monarquía francesa. La rebelión de las Trece Colonias ocurrida en 1776 únicamente inquietó a los colonos franceses del Caribe, como también a los británicos, por sus potenciales efectos generadores de revueltas masivas de esclavos, del tipo de la que finalmente estalló en Santo Domingo en 1793.⁷⁵ En 1789, los colonos franceses hubieron de enfrentarse, cosa que no ocurrió en el caso británico, con una violenta y radical transformación de la cultura política de la metrópoli que pronto amenazaría su propia supervivencia.

Como no podía ser de otro modo, la Revolución produjo un debilitamiento del apoyo táctico que las colonias podían recibir de la Francia metropolitana. Para los colonos era aún más preocupante la amenaza que suponía la pretensión de la Société des Amis des Noirs, entre cuyos miembros se contaba Robespierre, de lograr la emancipación total de todos los esclavos de las colonias francesas.⁷⁶ Su temor ante la suerte que pudieran correr a manos de una masa de esclavos liberada no carecía de fundamento. Las revueltas de esclavos habían sido una constante durante buena parte del siglo xviii y, si bien éstas habían sido por lo general infructuosas, los colonos eran conscientes de que su precaria situación dependía de la disposición que mostrara el gobierno metropolitano para procurarles protección. «Introducid los principios de la Revolución Francesa en América y liberad a los esclavos», aducía con histeria apenas contenida Pierre-Victor Malouet, antiguo comisario de Santo Domingo,

y las colonias dejarán de ser talleres de agricultura y comercio. Se convertirán, en su lugar, en un vasto arsenal de revolución, bandidaje y piratería, en el que encontrarán asilo y empleo los canallas venidos de todos los rincones del mundo. A no dudarlo, surgirán sociedades cuyos gobiernos serán enemigos del comercio, de la navegación y de toda la civilización de Europa. Allí, adaptada al fértil suelo y al, para nosotros, malsano clima de la Zona Tórrida, se multiplicará una población, y allí, de las Antillas a México y Brasil, desde las llanuras y las montañas del Nuevo Mundo, la filosofía de Marat propagará sus dogmas, sus agitadores y sus dagas.⁷⁷

Los prolongados y cáusticos debates que se mantuvieron entre 1790 y 1792 en la Asamblea Nacional en torno a la supervivencia de las colonias francesas en el Caribe fueron ante todo debates centrados en la conveniencia moral, política y económica de la esclavitud. El principal objetivo de los colonos era permanecer tanto tiempo como fuera posible bajo la custodia protectora de la nueva República Francesa mientras continuaban viviendo de una economía basada en una práctica que violaba los principios políticos y éticos sobre los que se fundaba dicha república. A tal fin recurrieron, junto con sus partidarios de Francia, a una distinción legal que habían introducido los colonos británicos en América en un intento de establecer una relación parecida entre ellos y la metrópoli.

Desde el siglo xvii, los escritores republicanos ingleses venían reclamando el reconocimiento de la separación legal de dos esferas que James Harrington describía como de ámbito «doméstico y nacional», por una parte, y «extranjero y provincial» por otra.⁷⁸ Según esta distinción, la relación legal entre la colonia y la metrópoli estaría determinada por un conjunto de leyes promulgadas en la metrópoli, que regularían las relaciones con el exterior, la defensa y, lo que constituía un aspecto más controvertido, el comercio de las colonias. Todas las cuestiones relativas a su gestión interna se regirían por la legislación promulgada por los propios colonizadores o sus instituciones representativas. Las colonias americanas, escribió Richard Bland en 1766, conformaban

un Estado aparte, independiente del reino primigenio en cuanto a su gobierno interno, pero unido a él en su política exterior de acuerdo con la más estrecha e íntima ASOCIACIÓN Y AMISTAD y una lealtad común, con participación en los beneficios de un intercambio recíproco.⁷⁹

Tal como ha señalado Bernard Bailyn, la interpretación de la crisis de la *Stamp Act* de 1764-1766 como una violación de la distinción entre las esferas de legislación «interna» y «externa»—y de las cargas impositivas respectivas—quedó firmemente asentada en el orden del día británico a raíz del célebre testimonio de tres horas pronunciado por Benjamin Franklin en la Cámara de los Comunes en febrero de 1776.⁸⁰ A partir de entonces, ésta condicionaría los planteamientos de todas las discusiones suscitadas por conflictos de competencias de autoridad legislativa entre las colonias y la metrópoli.

No obstante, tal como comprendieron Franklin y otros teóricos, esta distinción solamente tenía un adecuado sentido legal en el contexto del derecho común inglés. Para los españoles y los franceses,

como mínimo antes de 1789, habría sido un sin sentido legal reclamar una división entre las esferas de justicia cuando era una cuestión aceptada que ambas convergían en la persona de un solo soberano. En Francia, empero, la noción de soberanía absoluta del monarca desapareció con la Revolución, lo cual hizo posible que los colonos franceses y sus partidarios de la metrópoli, el más destacado de los cuales fue Antoine Barnave—que inició así una andadura que lo conduciría a la guillotina—introdujeran la diferenciación británica entre una legislación «interna» y otra «externa» con objeto de obligar al nuevo gobierno de París a concederles la libertad legislativa que necesitaban para mitigar, cuando no abolir, las leyes mercantilistas de Colbert y contener, a un tiempo, toda tentativa de emancipar a los esclavos.

Los ingleses, como señaló en 1791 Barnave en la Asamblea Nacional, habían tratado a sus colonias como «co-Estados en lo tocante a sus leyes internas», que sólo estaban «supeditadas» en lo referente a su *régime extérieur*. De haber seguido la lógica de este acuerdo y aceptado en consecuencia que éste confería a los habitantes de las colonias el derecho inalienable a gozar de representación en el parlamento, todavía tendrían sus colonias. Hasta entonces los franceses no habían efectuado ninguna distinción entre «esas dos clases de leyes que nunca deberían confundirse».⁸¹ No obstante, si la nueva monarquía constitucional francesa deseaba conservar el control sobre sus posesiones del Caribe, que, tal como había apuntado en 1789 el diputado por Guadalupe De Curt, tenían mucho que ganar y nada que perder «abriendo su puerto a todas las potencias comerciales de Europa», debería reconocer ahora el legítimo derecho que amparaba a los colonos en su reclamación de una representación plena en el recién establecido *Corps législatif national*.⁸² Cualquier pretensión por parte de la nueva Francia revolucionaria—todavía no republicana—de perpetuar el antiguo orden legislativo sólo podía desembocar en una insurgencia que la marina francesa no estaría en condiciones de sofocar. Hasta el mismo Brissot, el gran enemigo de Barnave, que habría preferido ver el hundimiento del imperio francés de ultramar, reconocía que los colonizadores habían pasado a formar parte del proceso revolucionario y no era posible negarles ninguna de las ventajas de que disfrutaban los habitantes de la metrópoli.⁸³

El proyecto de Barnave para lograr la emancipación de las colonias no contemplaba, sin embargo, la concesión a los colonos de todas las demandas de libre comercio que exigían, ya que, a su juicio, «las leyes de comercio y de protección» pertenecían al ámbito de la administración externa de las colonias.⁸⁴ Pero su admisión final de que en un fu-

turo ninguna ley, ni siquiera relativa a ese ámbito, «pase por el órgano legislativo sin el deseo preciso, formal y espontáneo de las colonias» otorgaba a las colonias una virtual independencia al menos en el terreno legislativo. Tal como indicó el 1 de marzo de 1790 «M. Blin», diputado de Nantes, con tales disposiciones, «las colonias podrían ser en cierta medida comparables a Irlanda, que posee su propia legislatura y un gobernador denominado virrey [*sic*] que representa al titular del poder ejecutivo».⁸⁵ Suscribiendo esta idea en 1797, cuando Francia había dejado de ser una monarquía, Pierre-Victor Malouet afirmaba que las colonias tenían «derecho a la independencia en lo tocante a su legislación interna y a elegir su modo de existencia».⁸⁶ De no tomarse estas medidas, las colonias, que todavía ocupaban un lugar clave en la vida económica y militar de la nación, buscarían por sus propios medios una solución, tal como lo habían hecho ya los británicos. «Rechazados como bastardos por nuestra madre común—advertía el panfleto anónimo *Un mot à l'oreille*—pronto podrían dejar de considerarse hijos».⁸⁷

En la Francia posrevolucionaria, la antigua metáfora madre-hijo que había cimentado la relación entre las colonias y su «madre patria», y que seguía condicionada como antes por el modelo de familia romana que otorgaba a los padres un poder absoluto sobre los hijos, no podía sostenerse ya. La misma metrópoli había renunciado de manera voluntaria a su función de patriarca romano, transformándose en una sociedad gobernada por las leyes. Como sabía por propia experiencia Talleyrand, todas las revoluciones dejaban una estela de «ansiedad general en las mentes de los hombres: una necesidad de movimiento».⁸⁸ Lo ocurrido en Francia debía dictar inevitablemente lo que a partir de entonces sucediera en las colonias. En caso de negar a las colonias la participación en el nuevo sistema legal, advertía Jean François Merlet, diputado de Maine et Loire, el imperio se vendría abajo. Aun cuando las colonias se mantenían fieles a la metrópoli por «intereses, necesidades y sobre todo por los estrechos lazos de fraternidad que los vinculan», nada de ello serviría si la Asamblea General excluyera a un solo ciudadano del amparo de la ley. «Es absolutamente vital—escribió—que la Revolución francesa produzca en las colonias los mismos frutos que ha dado en la metrópoli».⁸⁹ Merlet bebía de un lenguaje radicalmente distinto, el lenguaje de la ley como expresión de la voluntad general, la *volonté générale* de Rousseau. «La ley—escribió Malouet, ponderando las consecuencias que podía tener para las colonias una revolución que él mismo no tardaría en detestar—es el resultado de la voluntad general y de una comunidad». «En un imperio con una constitución republicana—escri-

bió otro ex mandatario colonial, Victor Collot—parece que la relación política entre la metrópoli y las colonias no debería contener desigualdades en lo que a sus derechos respectivos se refiere».⁹⁰

Al tratar de reformular la relación legal entre las colonias y la metrópoli, los franceses habían retomado primero una distinción proveniente del derecho común inglés y habían acabado empleando un lenguaje republicano, posrevolucionario, de derechos y ciudadanía. Este lenguaje, que colocaba a los colonos caribeños o incluso a los hurones en pie de igualdad legal con los bretones, por ejemplo, suponía en sí mismo, tal como reconocía Merlet, una mutación de las antiguas nociones de pertenencia universal a una única *civitas*. Tras la creación de la República en 1792, el «imperio francés», como así continuó llamándose, sólo podía pervivir llevando a sus últimas consecuencias la lógica de los edictos que habían establecido los primeros asentamientos en Canadá a finales del siglo xvi. Ahora, en cambio, los súbditos del rey habían sido transformados en ciudadanos depositarios de derechos y, por consiguiente, debía permitirse que todas las comunidades integrantes del Estado participaran en la consecución de sus intereses particulares, lo cual equivalía, en la práctica, a concederles el derecho a redactar sus propias leyes. El pueblo de Francia constituía—cuando menos contemplado desde el otro lado del Atlántico—una nación única con un único conjunto de intereses. Era evidente, sin embargo, que las colonias habían adquirido, con el curso del tiempo, intereses y preocupaciones distintos y en todo rigor, aun cuando continuaran siendo beneficiarias del proceso revolucionario, debía permitirseles elegir libremente sus propios modos de existencia. «Éstos son hombres—escribió Malouet—cuyas leyes, cuyas costumbres, el sol, el clima, sus necesidades, hábitos y moradas, sus modalidades de cultivo han hecho de ellos personas distintas a vosotros». Por este motivo, la ley que «es el resultado de la voluntad general y de una comunidad de intereses» debía ser también, según su conclusión, expresión de dicha diferencia.⁹¹

IV

Los contrastes tan marcados que presentaban los imperios europeos de América no se debieron únicamente al peso de las distintas concepciones de autoridad legal y de los atributos de la soberanía real. Si bien su importancia siempre fue enorme, estos contrastes también fueron producto de las diferencias existentes entre las mismas culturas políticas metropolitanas. El imperio británico de Amé-

rica se había basado, al menos antes del inicio de la Guerra de los Siete Años con Francia, en 1756, en la imagen del rey como benefactor remoto y no como juez, y acorde con ello, el grado de control ejercido sobre las colonias fue relativamente escaso. En la medida en que los colonizadores permanecieran leales y sirvieran, de un modo u otro, a los objetivos financieros y políticos de la metrópoli, podían trabajar sin interferencias para la consecución de sus propios propósitos. Paradójicamente, tal como han señalado muchos historiadores, los habitantes de las trece colonias continuaron considerándose en gran medida ingleses hasta que el comportamiento de su rey y de su gobierno—combinado con la tendencia intelectual de los colonizadores, en palabras de Edmund Burke, a «augurar a distancia el mal gobierno y a captar por el olfato la proximidad de la tiranía en cada soplo de aire enrarecido»—los impulsó a buscar una identidad cultural y política diferenciada.⁹² La deferencia que demostraron por su monarca en los años previos a la crisis de la *Stamp Act* fue en general superior a la de los británicos de nacimiento, tal vez porque, como apuntó David Hume, ignoraban la auténtica naturaleza de la institución real.⁹³ En tanto que la forma de gobierno relativamente libre y «liberal» aplicada en las colonias británicas pareció haber suscitado un alto grado de dependencia cultural de la madre patria, en la América española y francesa ocurrió exactamente lo contrario. Tanto entre los criollos españoles como entre los colonos franceses anidó un sentimiento de pertenencia a un mundo cultural independiente mucho antes de que llegaran a plantearse la necesaria constitución de una nación independiente en dicho mundo. Las monarquías francesa y española, sin embargo, habían procurado aplicar desde un principio la persuasión cultural como medio para garantizar la perpetuidad de la lealtad de sus poblaciones de colonizadores y, en el caso de España ante todo, la de los pueblos indígenas que habían colonizado.

Desde el punto de vista de Benjamín Constant, este intento de la metrópoli de limitar la expresión cultural independiente de los pueblos dependientes de ella era precisamente lo que distinguía el imperialismo moderno del antiguo. En tanto que los antiguos habían tolerado diferencias de costumbres dentro de la estructura de una ley única y la adhesión nominal a una religión «civil» nacional,

Los conquistadores de nuestro tiempo desean que su imperio presente una apariencia de uniformidad, sobre la cual pueda pasearse el orgulloso ojo del poder sin topar con ninguna irregularidad capaz de ofender o limitar su visión. El mismo código de leyes, la misma medida, las

mismas regulaciones, y si pudieran conseguirlo gradualmente, la misma lengua: ésta es la forma de organización social que se proclama perfecta.⁹⁴

Si bien la reflexión de Constant se inspiraba en el imperio napoleónico, su descripción se ajusta, *mutatis mutandi*, a la imagen que la mayoría de observadores, tanto hostiles como amigos, tuvieron del español y, en menor grado, del francés durante buena parte de su historia. Como observó Kant en 1795, la única cohesión auténtica a la que podía aspirar todo imperio, fueran cuales fuesen su extensión y ambiciones, debía fundarse, al final, no en la riqueza ni en la potencia militar, sino en la lengua y la religión, o formulado en términos más generales: la cultura.⁹⁵ Para Kant, la cultura era el medio por el cual podían impedir las naciones independientes la creación de un «despotismo universal». También era igualmente cierto lo contrario. Tal como advertía Charles Davenant a sus lectores a finales del siglo xvii, la clase de imperio que en realidad constituía España—y que a su juicio muy pronto constituiría Francia—sólo podía sustentarse mediante un nivel elevadísimo de tiranía cultural. La «esclavitud», señalaba, que imponen estas monarquías universales «sobre nuestros cuerpos no es nada en comparación con la que impondrían sobre nuestras mentes».⁹⁶ Sin la fuerza de la costumbre, que sólo puede lograrse manipulando los sistemas culturales y de creencias de la nación, las leyes del Estado serían ineficaces en los sitios donde no había poder para hacerlas respetar; y en el mundo de la temprana era moderna, a pesar de su ferocidad, estos poderes eran extremadamente limitados. El rey de España, como indicó en 1619 el benedictino Juan de Salazar, ostentaba tres tipos de soberanía sobre sus súbditos: «la de los cuerpos, la de las haciendas y la de los entendimientos», el más poderoso de los cuales era siempre el último.⁹⁷

En *Della Ragion di Stato* (De la razón de Estado) de 1589, Giovanni Botero había defendido que una verdadera «monarquía» exigiría también, con el tiempo, una lengua única—como la habían tenido «los romanos, los árabes y los normandos»—una moneda única y un único sistema de costumbres. Solamente de esta forma, sostenía, «los súbditos incorporados por conquista pueden llegar a parecerse a los súbditos naturales».⁹⁸ En opinión de Botero, el exponente máximo del buen funcionamiento de estas estrategias culturales era el Cuerpo de Jenízaros que, sin ser sus integrantes turcos ni musulmanes de origen, se había destacado, al igual que la Guardia Imperial Romana, como la más leal y acérrima de las tropas del sultán. Por no haber comprendido que éste era el único procedimiento que permitía crear y mantener

imperios extensos, Francia había perdido primero Sicilia y después Nápoles y Milán, los ingleses Francia y los latinos Constantinopla. Pues ninguna de estas naciones, concluía, habían sabido «gobernarlos de modo que sintieran como propios los intereses del Estado».⁹⁹

Los propios españoles eran por lo general muy conscientes de la fuerza de dichos argumentos. En 1570, el humanista Benito Arias Montano, responsable de la biblioteca y archivos de Felipe II, había recomendado al duque de Alba la fundación de una cátedra de español en la universidad de Lovaina, puesto que, «después del hecho de la religión, no hay cosa que más concilie los ánimos de los hombres de varias naciones en amistad y conservación, que más los domestique y aficione a imitar y seguir las costumbres de los que los rigen, que la unidad y conformidad de lengua». «Ésta fue—continuaba—una de las cosas que principalmente procuraron los romanos para confirmar su imperio en la tierra».¹⁰⁰

Dado que el hipotético gobernante mundial debe transformar las costumbres y creencias de los pueblos que desea gobernar, su objetivo es crear una nueva comunidad de conocimiento homogénea. El instrumento principal para ello, tal como había manifestado ya Livio, había sido siempre la religión. Además de ser una característica del imperio, la *pietas* romana había sido un recurso que se había empleado activamente para sustentarlo. Los antiguos, como observó el español Juan Fernández de Medrano, siempre habían «tenido en igual estima [la religión y el amor por la patria]».¹⁰¹ Cuando ello fuera posible, aconsejaba Tommaso Campanella, el monarca universal debía crear una nueva religión, como había hecho Mahoma y, anteriormente, Rómulo y Pitágoras. También esto había constituido la buena fortuna de Carlomagno y el objetivo manifiesto de Enrique VIII de Inglaterra y del protector de Lutero, Federico de Sajonia.¹⁰² El monarca castellano no disponía de tal opción, pero de todas formas, debía, insistía Campanella, imponer una rígida ortodoxia en todos sus dominios, que lo identificase a él y a su autoridad con la de la Iglesia. Tal como sostenía Diego de Saavedra Fajardo, casi de forma simultánea a Campanella, en su *Idea de un príncipe político-cristiano*, de 1639, de un exceso de libre reflexión intelectual «resulta la variedad de sectas y dellas la mudanza de los imperios». Él aconsejaba a sus amos que incrementásen el número de navegantes y estrategias militares y redujeran el de eruditos.¹⁰³ Así la «intolerancia» española, que para muchos críticos ingleses y franceses fue el origen de la ruina final del imperio, se presentaba ante quienes se hallaban en su seno como el instrumento principal de gobierno.

V

Al igual que los españoles, los franceses habían fundado sus primeras colonias con la intención explícita, aunque sólo someramente definida, de crear una única comunidad cultural, legal y—en este último punto radica la novedad francesa—racial. Según las condiciones de creación de la *Compagnie des Cien Associés*, tanto los pobladores franceses como sus descendientes y los indígenas americanos

que hayan llegado a un conocimiento de la fe y hayan hecho profesión de ella, deben ser tenidos por franceses naturales, y como tales pueden ir a vivir a Francia siempre que lo deseen.¹⁰⁴

A partir de 1663, cuando la *Compagnie des Indes Occidentales* se hizo cargo de los asentamientos de Canadá, Acadia, Terranova y las Indias Occidentales, se alentaron los matrimonios entre pobladores franceses e indígenas americanos. A pesar de describir a los iroqueses como «verdaderos salvajes que sólo tienen de humano la apariencia de hombres», Colbert se refería en el mismo documento y sin al parecer poner mientes en la contradicción en la que incurría, a la urgente necesidad de «obligar a los salvajes a instalarse entre nosotros y a [aprender] nuestras costumbres y nuestra lengua».¹⁰⁵ El acta de fundación de la *Compagnie des Indes Occidentales*, de cuya redacción se ocupó Colbert, otorgaba a todos los que emigraran a América, «las mismas libertades y derechos que tenían mientras vivían en este reino» y, lo que aún es más sorprendente, hacía extensibles las condiciones expresadas en la *Acte pour l'établissement de la compagnie des cien associés* a

las personas nacidas de [los colonizadores] y los salvajes que se han convertido a la fe Católica, Apostólica y Romana, que deben ser registradas y contabilizadas como habitantes nacidos en Francia, y como tales son acreedoras de todos los derechos de sucesión, ante las leyes y otras disposiciones, sin que tengan obligación de obtener ninguna carta de naturalización.¹⁰⁶

La esperanza de que el imperio francés de ultramar pudiera de algún modo trascender los males que se habían abatido sobre el español, eludiendo a un tiempo la gran liberalidad de la política aplicada por los británicos en sus colonias, indujo a Antoine de Bougainville, el futuro descubridor de Tahití, a proponer en 1757 un plan para

fundar un asentamiento de franceses e indígenas americanos en Illinois, regido según el modelo «del antaño famoso sistema de la República de Esparta».¹⁰⁷

Colbert emprendió su proyecto de «afrancesamiento» (*francisation*) porque por una parte creía que, para resistir frente a la hostilidad de los ingleses, se necesitaba un ingente aumento de la población de las colonias americanas, y por otra, pensaba que dicho objetivo se lograría más fácilmente por este procedimiento que a través de migraciones masivas.¹⁰⁸ No obstante, con ello también tenía la intención de hacer extensible a Canadá y al Caribe el proyecto de Luis XIV de un «*état unifié*», unido por la lengua, las costumbres, la religión, el rey y, en este caso, la consanguinidad, que posteriormente muchos europeos considerarían como el Estado sucesor de la «monarquía universal» de los Habsburgo.

Los españoles, cuyas poblaciones autóctonas habían pasado a la historiografía del imperio como nobles aunque primitivos guerreros, contemplaron, al menos en un principio, a éstos como potenciales partidos con los que unirse en matrimonio, si bien la corona nunca hizo nada para alentar tales uniones. Algunos miembros de la clase conquistadora trataron incluso de establecer alianzas matrimoniales con miembros de la aristocracia indígena. El hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo, declaró al rebelarse contra la corona que se casaría con una princesa inca, convirtiéndose así en rey del Perú, pero lo mataron antes de que pudiera poner en práctica esta novedosa alianza dinástica.¹⁰⁹ Estos casos no fueron, sin embargo frecuentes, y llegado el siglo XVIII, la alianza con la aristocracia indígena había quedado relegada a una serie de metáforas que mantenían la mayor distancia posible entre los auténticos criollos, el ya mitificado pasado azteca e incaico, por un lado, y por otro, la penosa realidad de la clase mestiza y de los pueblos amerindios que aún mantenían su autonomía. Si bien la integración racial dio lugar en Hispanoamérica a nuevos grupos de pueblos dotados de distintas culturas y más tarde de aspiraciones políticas distintas, en ningún momento desempeñó un papel en la concepción que del imperio tenía la corona como única unidad cultural y política.

Los ingleses, preocupados por domesticar lo que uno de ellos designó como la «infinita soledad sin atractivos» de América, encontraban aborrecible la idea de los matrimonios interraciales.¹¹⁰ Tal como señaló sir Josiah Child en 1665, los españoles habían tenido la suerte de instalarse en zonas donde ya existían ciudades y plantaciones y donde había poblaciones indígenas con las cuales podían cruzarse, mientras que los británicos sólo tenían «salvajes infieles, con los que

no podían ni llegaron nunca a cruzarse».¹¹¹ La gran excepcionalidad del caso de Pocahontas y John Smith se debió precisamente a que aquello constituía algo inimaginable para la mayoría de los colonos ingleses de América.

Francia fue la única potencia europea que intentó formar una réplica de su sociedad en América con una población mestiza. Lo paradójico es que en Canadá se diera una división, todavía vigente hoy en día, entre las poblaciones autóctonas y oriundas de Europa más marcada que en cualquier otra comunidad de América. El efecto que a la larga produjo el plan de Colbert fue, como observaría con mordacidad Mirabeau en 1758, que «en lugar de afrancesar a los salvajes, éstos han asilvestrado a los franceses», haciendo de ellos, en su opinión, personas «incapaces de la subordinación que es el alma de todas las colonias».¹¹² No es pues de extrañar que cuando François de Volney, uno de los más perspicaces observadores del proceso colonial, recorrió la región en 1797 la encontrara mayoritariamente habitada por «franceses de la época de Luis XIV que se han vuelto medio indios» junto con «ingleses del último siglo».¹¹³

El proyecto de mestizaje global que se demostró como un fracaso en América intentó revalidarse, no obstante, en el Pacífico. Éste parecía ofrecer la oportunidad de aplicar un nuevo tipo de colonización que habría de beneficiar de igual forma al colonizador y al colonizado. En su *Histoire des navigations aux Terres australes*, Charles de Brosses evocaba en 1756 la imagen de una nueva América de las Antípodas habitada por pueblos con una cultura y disposición similares a las de los indígenas que Colón y sus sucesores habían poco menos que aniquilado. «Pero figuraos», escribió De Brosses,

un futuro que en nada se asemeja al que Cristóbal Colón procuró a nuestros vecinos... Su ejemplo sería instructivo para nosotros, puesto que evitaríamos los dos vicios que aquejaron a los españoles, la avaricia y la crueldad. La primera dejó vacío su país por el afán de conseguir una ilusoria fortuna, que es algo que nunca debe intentarse. La segunda, causada por el orgullo y la superstición nacional, ha aniquilado prácticamente la raza humana de América. Masacraron con desdén, como si fueran extrañas y despreciables bestias, a millones de indios que habrían podido convertir en hombres. Destruyeron hasta el último hombre, cientos de razas, como si pudiera extraerse algún provecho de tierras deshabitadas.

«La experiencia ha demostrado, sin embargo—continuaba—que en esos remotos climas, hay que comerciar en lugar de conquistar, que no es cuestión de establecer reinos imaginarios más allá del ecuador». El nuevo imperio francés debía ser, por el contrario, una red de puestos comerciales que trabajarían para el provecho mutuo de todos los que participaran en ellos. Atraerían hacia ellos a los «salvajes» sacándolos de «las selvas» y les permitirían «disfrutar de las ventajas de las leyes humanas y sociales», de modo parecido a como habían hecho los jesuitas en Paraguay. Los futuros imperios franceses, concluía De Brosses, no debían tomar como modelo a los españoles ni a los romanos, sino a los fenicios, puesto que en lugar de crear dependencias o colonias, éstos habían creado nuevas naciones, y «¿qué objetivo más grandioso que ése podría tener un soberano?».¹¹⁴

La vuelta al mundo llevada a cabo por Bougainville entre 1766 y 1769, y en especial la descripción aparecida en su *Voyage autour du monde* de la isla de Tahití, a la que puso por nombre «La Nouvelle Cythère», parecían corroborar lo imaginado por De Brosses. Los descubrimientos de Bougainville dieron, asimismo, alas a las esperanzas que Diderot cifraba en un futuro Estado basado en la imagen de una armonía racial que no sólo mitigara la ansiedad producida por el declive de la población en el siglo XVIII y el horror de la Ilustración por la devastación desencadenada por los colonizadores europeos en ultramar. Dicho Estado también proporcionaría a la humanidad entera la imagen de una comunidad feliz, situada, según expresión de Diderot, «a medio camino entre el salvajismo y la civilidad».¹¹⁵

A pesar de su fracaso, la visión de Colbert de una sociedad unida en el mestizaje fue, y continúa siendo en lo que queda hoy en día del imperio, un importante componente de la imagen que el imperio francés tenía de sí mismo. Aun cuando no consiguiera integrar el colonizador con el colonizado, favoreció una identificación más estrecha con la metrópoli de la población colonizadora, como no se dio en el caso de la América española ni de la británica. Los franceses, escribieron con tono admirativo Edmund y William Burke en 1757, «consideran al colono como un francés que arriesga su vida, soporta una especie de destierro y sufre grandes penalidades por el bien de su país». Los franceses eran, bajo su punto de vista, la única potencia colonizadora que «promueve las relaciones entre la humanidad, el poblamiento de la tierra y los adelantos de su país mediante una sabia y eficaz regulación».¹¹⁶

VI

La «Nueva Citerea» era, y seguiría siendo, un absoluto espejismo: «viejas mercancías vendidas por nuevas», como señalaría con sarcasmo el abad Galiani en 1769.¹¹⁷ También era una ilusión la visión española de un solo orden mundial gobernado por una sola ley. El fracaso de los europeos en establecer una cultura universal, una *civitas* mundial, que tan bien habían sabido imponer los romanos, era para muchos indicativo de que los modernos imperios extensos de ultramar estaban abocados a una pronta y por lo general desastrosa extinción. Con el transcurso del tiempo, en los asentamientos fundados por las tres potencias europeas en América, en lugar de florecer una mayor armonía con Europa, habían surgido, a veces de modo involuntario, identidades culturales, económicas y políticas propias. A principios del siglo XVIII resultaba evidente que en el caso de España, la relación de poder entre colonia y metrópoli no sólo había cambiado, sino que se había invertido. «Las Indias y España son dos poderes sujetos al mismo soberano—observó Montesquieu en 1748—pero las Indias es el principal y España no pasa de ser un mero accesorio».¹¹⁸ Esta creciente dependencia económica y cultural puso también de manifiesto la posibilidad, no sólo de que en su día reclamasen autonomía política, sino la otra que ya previó Benjamin Franklin: que llegaran a tomar el relevo de la madre patria como centros políticos y económicos de sus respectivos imperios.¹¹⁹ (Esto fue precisamente lo que ocurrió en Brasil cuando la Corte portuguesa se trasladó a Río de Janeiro en 1808.)

El lenguaje empleado para describir las relaciones entre las colonias y las metrópolis no estaba, con todo, tan dominado por los ejemplos de la Antigüedad como por el campo semántico que giraba en torno a la familia.¹²⁰ «Dada la potencia de la imagen—ha señalado Gordon Wood—su capacidad evocadora del mundo tradicional personal en el que todavía vivían los colonizadores, casi todo el debate imperial se desarrolló dentro de su marco».¹²¹ La imagen padre-hijo podía asimismo enlazar con una influyente tradición ideológica del pensamiento político británico del siglo XVII, el patriarcalismo, y más concretamente, el patriarcalismo de sir Robert Filmer. John Locke escribió el *Second Treatise on Government*, que se convertiría en el documento básico del republicanismo norteamericano, con intención (o al menos así se creyó) de refutar a Filmer, y en las mentes de los defensores de la autonomía colonial, el patriarcalismo quedó asociado a la antigua pretensión de la corona inglesa de lograr una soberanía absoluta, y por tanto «papista», sobre su pueblo. Esto era segu-

ramente a lo que apuntaba Tom Paine en 1776 al escribir en *Common Sense* (*Sentido común*) que:

La expresión «padre» o «madre patria» (*parent or mother country*) ha sido adoptada con actitud jesuítica por el rey y sus parásitos, con el detestable designio papista de abrirse camino por oscuros vericuetos hacia la credulidad de nuestras mentes.¹²²

La figuración filial también podía, no obstante, utilizarse, siempre y cuando no se filtraran en ella insinuaciones de signo filmeriano, en favor de los colonizadores. La metáfora de la «madre patria» llevaba implícita una emancipación final, puesto que así como los niños se transforman en adultos, las colonias deberían convertirse algún día en Estados independientes. Por más que los asentamientos ingleses en América fueran aún «niños de pecho que no pueden vivir sin mamar del pecho de sus ciudades-madres», escribió ya en 1656 James Harrington, cuando el «imperio británico» de América apenas existía, «sería a mi entender un error que no se desteten cuando lleguen a la edad justa; lo cual me llena de extrañeza al ver los príncipes a quienes causa deleite que los agoten de este modo». ¹²³ El patriarcalismo adaptó la imagen de la familia al conjunto de la sociedad humana, contemplada como una entidad que, cuando menos en lo tocante a las relaciones de poder y autoridad, debía ser inmutable a través del tiempo histórico. La metáfora madre-hijo, por el contrario, sólo podría interpretarse en un plano histórico. «Suponiendo, pues», escribió Richard Price en 1776,

que al establecer la relación entre padres e hijos, nuestra conducta para con las colonias debiera regirse por las normas que dicta el orden de la naturaleza, deberíamos haber relajado nuestra autoridad a medida que crecían.

Dedicados al cuidado de sus propios intereses nacionales, los británicos se habían comportado, a decir de Price, como «padres insensatos», haciendo «lo contrario», y como padres insensatos perderían pronto el amor y el respeto de sus hijos. ¹²⁴ Desde la perspectiva aportada por el paso del tiempo, en la primera década del siglo XIX, el panfletista, consejero de Simón Bolívar y durante un tiempo embajador napoleónico, Dominique Dufour de Pradt, observó que los británicos habían perdido sus colonias precisamente por no haber sido capaces de advertir dicha transición. Los españoles, advertía, estaban a punto de imitar su desastroso ejemplo. ¹²⁵ No en vano, señalaba De

Pradt retomando el hilo de lo expuesto por Montesquieu, la dependencia de la metrópoli exigía por fuerza que ésta fuera más poderosa y tuviera, en cierto sentido, una sociedad más avanzada que la de sus colonias. Cuando no se daba este caso, la emancipación, aunque no estuviera refrendada legalmente, se convertía en un hecho. «¿Estarán dispuestas las colonias británicas—se había planteado Richard Price—a seguir reconociendo la supremacía que ahora se reclama sobre ellas, cuando

dentro de 50 o 60 años tengan el doble de población que nosotros y formen un poderoso imperio, compuesto de diversos Estados, todos ellos iguales o superiores a nosotros en cada una de las artes y logros que confieren dignidad y felicidad a la vida humana?». ¹²⁶

La relación política entre Inglaterra y sus colonias de América había sido siempre más distante que la que mantenían Francia y España con sus posesiones americanas. Aun cuando en el siglo XVII en los «reinos de las Indias» hubieran surgido ya culturas independientes, los colonizadores españoles siguieron remitiéndose a Europa como fuente de su legitimación política hasta que el cambio de las condiciones políticas de la metrópoli los impulsó a buscar su independencia a comienzos del siglo XIX. Las colonias británicas, en cambio, debido a que sus sociedades fueron concebidas, en ocasiones desde su fundación, como comunidades semiindependientes, habían tenido siempre la aguda conciencia de que su propio bienestar dependía sólo de ellos y de que el «poderoso imperio» que había soñado en 1759 Jonathan Mathew para América, «tal vez algo inferior en número a los más grandes de Europa, pero no superado en felicidad por ninguno», debían crearlo, por consiguiente, ellos mismos. ¹²⁷

A despecho de este acusado sentimiento de identidad política, los americanos británicos mantuvieron hasta su independencia una afiliación cultural con la madre patria mucho más fuerte que los criollos españoles e incluso a veces que los colonos franceses. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, sin embargo, al tratar el poder metropolitano de estrechar las ataduras de las colonias, los mismos británicos comenzaron a darse cuenta de que no era posible sostener la imagen de América como una Inglaterra transplantada, mejorada y purificada. Thomas Pownall ingenuamente creía que en

la limitación de las capacidades y el alcance de las necesidades de cada uno, todos están imbricados en un necesario intercambio y vinculados de manera indisoluble en una unión y comunión de un conglomerado de in-

tereses generales de la totalidad de asentamientos españoles, franceses, holandeses, daneses y británicos. Éste es el estado natural de las posesiones europeas del Atlántico y América.¹²⁸

En la fecha en que fue escrita, 1765, esta afirmación era ya vana. Un año después se pondría dolorosamente de manifiesto la verdad que contradecía la certeza de Pownall de que «nada puede erradicar de sus corazones su natural y casi mecánico afecto hacia Gran Bretaña, a la que llaman y consideran su patria».¹²⁹

No obstante, aun cuando Pownall hiciera una valoración errónea de la fuerza de esos antiguos vínculos, su posición refleja una convicción, compartida tanto por franceses y españoles como por británicos, de que en el terreno político y cultural, los grandes imperios únicamente podían sustentarse a la postre a través de dichos vínculos. Pownall había comprendido, asimismo, que de ello debía derivarse el planteamiento de la asociación de las diversas partes del imperio no en términos de dependencia, sino de federación. El concepto de federación, por otra parte, quedaba ya integrado en un discurso abocado a calcular los méritos de cualquier sociedad en función de los beneficios que podían sustraer de ella todos y cada uno de sus miembros. Éste era también el discurso que describía a los imperios, de acuerdo con la visión que de ellos ha transmitido gran parte de la historia moderna, como instituciones políticas esencialmente inviables y humanamente intolerables, que hacían imposible una buena gestión económica y administrativa.

CAPÍTULO 6

EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS

Vous avez attaché des peines aux crimes; attachez des récompenses à la vertu; et ne redoutez pour la durée de vos empires, que le laps de temps.

DENIS DIDEROT, *Salon de 1767*

I

«La fuerza que necesita un pueblo para mantener sometidos a los demás», escribió Benjamin Constant en 1813,

es hoy, más que nunca, un privilegio que no puede durar. La nación que pretendiera crear un imperio de dichas características se colocaría en una posición más peligrosa que la de la más endeble de las tribus. Se convertiría en blanco del horror universal. La amenazarían todas las opiniones, todos los deseos, todos los odios y, tarde o temprano, estos odios, estas opiniones y estos deseos estallarían y la sepultarían.¹

Constant se refería, naturalmente, al imperio napoleónico, pero la condena expresada en su ensayo *De la conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne* y la amplitud de la revulsión moral a la que hace mención habían echado ya firmes raíces a principios del siglo XVIII. «Aun cuando el éxito acompañe a estos hijos de la violencia», había escrito en 1728 Thomas Gordon en alusión a los primeros fundadores de los imperios europeos,

se puede decir sin error que lo único que consiguen es entronizar la maldad. ¿Qué ocupación y finalidad tienen los príncipes y gobiernos, si no la de gobernar a los hombres para su propio bien e impedir que se infieran daño unos a otros? ¿Acaso ha existido algún conquistador que mejore la situación de los conquistados?²

La pregunta de Gordon no admitía réplica, en gran parte porque los imperios europeos no se habían fundado de acuerdo con un cálculo de los posibles beneficios, y menos aún de los posibles beneficios que pudiera proporcionar el colonizador al colonizado. La noción que había amparado sus comienzos era que la grandeza del gobernante era